
LOS PARTIDOS POLITICOS Y EL ESTADO CAPITALISTA

Jim O'Connor

análisis y debate



4

1. Dos cuestiones importantes son la de cuál es la naturaleza de los partidos políticos en las modernas democracias burguesas, y la de qué aspectos de los partidos políticos son específicos de las particulares formaciones sociales capitalistas (por ejemplo, la moderna Alemania Occidental o los Estados Unidos). Hasta ahora no se han realizado análisis abstractos de los partidos políticos a la altura del análisis de Marx sobre el capital y la acumulación de capital, y del análisis colectivo del Estado capitalista hoy en curso en los países capitalistas avanzados. Una razón es que los partidos políticos constituyen tentativas conscientes, por parte de individuos y de grupos, de planear la actividad colectiva, y el papel de las personalidades y de los factores subjetivos resulta crucial. Otra razón es que no existe un criterio valorativo abstracto que guíe o inspire la actividad de los partidos políticos. Resulta sencillo elaborar generalizaciones científicas sobre la acumulación de capital (por ejemplo, la concentración y centralización de capital, las tendencias a las crisis, etc.) y el Estado capitalista (por ejemplo, la inevitabilidad de los conflictos entre la acumulación bu-

rocrática estatal y las funciones de legitimación). Menos sencillo resulta descubrir cualquier tipo de ley, regularidad o posibilidad de predicción en lo que respecta a las organizaciones de los partidos, a su dirección, a su política y al sistema de partidos en general. Por ejemplo, ni el dominio de McGovern sobre el Partido Demócrata en 1972 ni el papel específico de Nixon en la anterior política del Partido Republicano fueron previamente planeados.

Incluso resulta difícil descifrar y aprender el significado de los nombres y apelaciones de los partidos políticos. El Partido Conservador alemán del siglo XIX era el partido de los terratenientes prusianos y era por ello distinto del Partido Conservador inglés, al que aquél despreciaba. Poco tenía de liberal el Partido Nacional Liberal de los industriales alemanes. En la Alemania de finales del siglo XIX, cuando los liberales abandonaron las reformas internas pasaron a ocuparse de la expansión exterior y del imperialismo y tuvieron poco en común con el Partido Liberal inglés de los librecambistas. Palabras como liberal, radical, popular, demócrata y republicano tienen sentidos muy específicos. Una tarea de la teoría de los partidos políticos consiste en descifrar esos significados en los términos de las concretas formaciones sociales capitalistas y en los términos del propio modo de producción capitalista.

La importancia de los análisis específicos de los partidos políticos queda realizada por la diversidad de desarrollo global de los sistemas políticos en los países capitalistas avanzados, que es ella misma fruto de las diferentes configuraciones de la actividad política y de la lucha de clases. El federalismo alemán fue establecido para preservar y aumentar el poder de los Junkers y de Prusia. El federalismo de los Estados Unidos se construyó para mantener e intensificar el poder de los plantadores del Sur. Las raíces del federalismo son profundamente conservadoras y reaccionarias en ambos países pero no son, en modo alguno, fruto de formaciones sociales comunes. Ambas son producto de un desarrollo desigual y combinado en diferentes estadios de crecimiento capitalista. Las raíces del federalismo estadounidense se basan en una estructura social y económica única consistente en el monocultivo y la economía esclavista, la producción independiente de mercancías y el capitalismo de poca monta, capitalismo mercantil en la costa Este, etc. Las raíces del federalismo alemán arrancan de la naturaleza incompleta y deformada de la revolución burguesa alemana y del reforzado poder de los Junkers. La escasez y lentitud del desarrollo de la democracia política, junto con la rápida industrialización y proletarización y la ausencia incluso de un concepto de oposición legítima dentro de las clases dominantes (entre otros factores típicos de Alemania), condujo a una explosión de la actividad del Partido Socialdemócrata a finales del siglo XIX. La diferencia entre la experiencia alemana y la estadounidense en contextos federales muy similares no sugiere otra conclusión que la de que cualquier análisis científico de los partidos políticos requiere un análisis paralelo de las similitudes y diferencias existentes en las formaciones sociales y políticas capitalistas.

Existen, sin duda, grandes similitudes en el desarrollo de los partidos políticos de Europa, que contrastan fuertemente con el capitalismo de los colonos blancos norteamericanos. Aunque la apropiación privada de la autoridad pública ha sido un fenómeno universal en las democracias burguesas durante los últimos cincuenta o setenta y cinco años, está claro que el pluralismo americano es único. Según el pensamiento burgués, los partidos políticos estadounidenses son foros de agrupamiento pragmático que actúan de mediadores entre los grupos de interés y realizan una función de estabilización totalizadora o integradora. Por lo menos en el pasado, los partidos europeos han sido más ideológicos y han tomado posiciones claras en un amplio abanico de temas (lo que el pensamiento burgués de estos países considera un comportamiento «subdesarrollado» o disfuncional). De aquí que en Europa, especialmente en el pa-

sado, la función estabilizadora que los partidos realizan en Estados Unidos tenga que llevarse a cabo por otros medios. Sin duda el medio más importante es el comportamiento de las élites europeas que aceptan suprimir las polarizaciones que se originan en el seno de la militancia. Si en Europa la fuerza unificadora es la élite burocrática y la dirección política, en los Estados Unidos lo es el Departamento del Presidente o la proliferación de instancias de control sobre la burocracia pluralista y competitiva, por ejemplo, el Council of Economic Advisors, Office of Management and Budget, National Security Council, Domestic Council, etc., que son una especie de contrapartida americana a las burocracias heredadas y a las tradiciones que tienen su origen en los Estados absolutistas europeos.

En comparación con Europa, hay en los Estados Unidos menos centralización de la autoridad estatal, no hay sistema parlamentario y, en términos comparativos, las diferencias programáticas entre los partidos más grandes son menores. Esto significa que las elecciones han sido más decisivas para la conformación de la política estatal y para el cambio político que en los Estados Unidos. Significa también que la separación entre las clases económicamente dominantes y la élite de poder (los dirigentes políticos que son normalmente políticos profesionales) es relativamente amplia en los Estados Unidos. En Europa, la relativa centralización del sistema de partidos y de la burocracia estatal permite a los individuos adquirir poder sin tener que transcurrir por los asfixiantes senderos de la fama americana.

2. Estas breves comparaciones y contrastes eran necesarios para poner de relieve la necesidad de análisis específicos y coyunturales de los partidos políticos en los países capitalistas desarrollados. Pero tiene que haber alguna uniformidad por debajo de las específicas diferencias entre el sistema de partidos en los países desarrollados, o algún tipo de relación sistemática entre el modo de producción capitalista como tal y los partidos políticos en las democracias burguesas. También tiene que haber alguna relación entre el estadio de desarrollo capitalista y las funciones materiales e ideológicas de los partidos.

Simplificando y esquematizando de forma drástica, la estructura social de clases en el temprano desarrollo capitalista consiste en una pequeña burguesía progresista que monopoliza crecientemente la riqueza social, y una clase terrateniente pequeña pero privilegiada y políticamente poderosa (con sus tradicionales aliados financieros y comerciantes) junto con la clase mayoritaria de productores independientes de bienes dominada por el campesinado, y una pequeña pero creciente clase de trabajadores asalariados (y, en los Estados Unidos, mano de obra esclava). La estructura política consiste en el partido de la joven burguesía que a menudo incluye a elementos del viejo orden económico y a los productores independientes. Estos últimos se alían con la burguesía porque ambas clases pretenden abolir ciertos aspectos del Estado feudal absolutista, como las restricciones a la libertad de propiedad privada, los impuestos altos, los gastos dispendiosos del Estado, etc. Más tarde, la burguesía y los pequeños productores entran en conflicto en temas tales como la competitividad, los mercados nacionales y la centralización del poder político. La estructura política incluye también al partido de los antiguos terratenientes y al partido o partidos de los productores independientes y pequeños capitalistas. Los trabajadores asalariados no tienen partido y normalmente se vinculan a las organizaciones de los pequeños productores y trabajadores artesanos semi-independientes. La configuración resultante se compone de un partido liberal de la burguesía, un partido conservador de los defensores del viejo orden económico y un partido demócrata o socialista de los pequeños productores y trabajadores artesanos. A veces, un partido de campesinos o granjeros coexiste con el partido demócrata o socialista.

El elemento básico de este sistema de partidos políticos del primer capitalismo es que cada partido es *instrumental* en propósito y función. Está organizado para promover los intereses materiales y sociales de una clase concreta o estrato de clase. Cada clase con su propio partido representativo constituye, de una u otra forma, una verdadera clase poseedora de bienes. Ello significa que el sistema de partidos no plantea ningún desafío a la propiedad privada de los medios físicos de producción en sí misma considerada, a pesar del hecho de que los partidos son estrictamente instrumentales. El partido de la burguesía es el dominante en esta estructura porque la burguesía controla las fuerzas productivas en expansión en forma de bienes económicos. Pese a lo complejo de los compromisos políticos, con sus desviaciones, retrocesos y dictaduras temporales —que de hecho caracterizan la historia de los partidos en este período— el partido de la burguesía normalmente aparece como el predominante. En otros términos, después de que la burguesía ha derribado al Estado absoluto, o ha llegado a un compromiso con él, utilizando a los campesinos y pequeños productores como fuerzas de choque, queda de manifiesto que los capitalistas tienen el monopolio del poder político.

En realidad, la burguesía domina políticamente sólo porque no hay otras clases capaces de contender seriamente por el poder. La vieja economía terrateniente está en declive o se va transformando en economía capitalista. Los antiguos productores independientes están siendo proletarizados y la nueva clase de trabajadores asalariados es pequeña y dividida y demasiado débil para desafiar el poder de la burguesía. La revolución burguesa establece una neta distinción entre el poder económico y la norma política, así como entre los recursos privados del gobernante y los recursos públicos del Estado. Hablando en términos estructurales, los capitalistas no fueron nunca, ni pudieron ser, la clase políticamente dominante porque el precio que pagaron por su libertad para organizar la vida económica de acuerdo con los criterios del mercado privado fue la renuncia a toda posibilidad de dirección política formal. Una constelación temporal de relaciones de clase que diera a la burguesía el poder político no debe ser confundida con el sistema capitalista como tal, que separa lo económico de la dirección política.

Esquemmatizando mucho otra vez (e ignorando todo el problema de cómo los Estados y partidos capitalistas respondieron al desarrollo de la economía mundial y a su tendencia a la crisis, especialmente a la guerra y a las amenazas de guerra), el proceso de acumulación de capital da lugar a los siguientes cambios en los partidos políticos. La conversión de la vieja economía en la nueva economía burguesa provoca la decadencia del viejo partido conservador o su integración en el partido burgués y la aparición de un solo partido capitalista. En la Cámara de los Comunes inglesa la proporción de miembros procedentes de las clases comercial e industrial pasó del 24 % en 1874 al 38 % en 1885, mientras que la proporción de terratenientes y rentistas descendió del 32 % al 16 %. En Francia, el monopolio el poder político por parte de la aristocracia y de los banqueros en 1830 fue roto de forma casi completa por la burguesía en torno a 1870. Todavía en los años sesenta del siglo pasado, los senadores italianos eran nombrados directamente por el rey entre los aristócratas y terratenientes. En Alemania la burguesía nunca tuvo un monopolio efectivo del poder político pero recibió favores como pago a su apoyo a la dirección política de los Junkers en la última parte del siglo XIX.

Los viejos partidos demócrata y socialista luchan en vano en defensa de los decadentes productores independientes y artesanos y, o bien desaparecen como factor importante en el desarrollo capitalista, o se revitalizan temporalmente al conseguir el apoyo de los nuevos estratos de «cuello blanco». La mayoría de las clases produc-

toras se proletarianizan en el doble sentido descrito por Marx en *El Capital*. Finalmente, se funda un partido de los trabajadores, inevitablemente impregnado de elementos ideológicos procedentes de la pequeña burguesía, el artesanado o el campesinado. En Inglaterra, este proceso se inicia en 1867 cuando las clases dominantes se vieron forzadas a reformar las leyes electorales para permitir la entrada del sector alto de los trabajadores asalariados en la esfera de las elecciones políticas y de la democracia representativa. El partido obrero crece rápidamente y se convierte en el partido mayoritario al tiempo que la clase obrera crece y se convierte en la clase mayoritaria del Estado. En suma, lo que empieza como un esquema de tres partidos que representan a la burguesía, a los terratenientes y a los trabajadores por cuenta propia, termina siendo un partido que representa a la burguesía y otro que representa al proletariado, es decir, a los creadores de bienes.

3. La llegada de la era de la clase obrera y de su partido (laborista, socialdemócrata o comunista) constituye un grave peligro para la clase capitalista. En su juventud, la burguesía legitimó la propiedad privada de los medios de producción no sólo como base de la producción económica sino también de la libertad política. Intenta abolir la libertad política pero a costa de subvertir una legitimación esencial de la propiedad privada. Como Strachey, Schumpeter y muchos otros teóricos sociales han escrito, en los países capitalistas avanzados aparece una enorme contradicción. El poder económico está concentrado en manos de unos pocos grandes capitalistas e instituciones capitalistas. El poder político se concentra potencialmente en manos de la clase obrera desposeída de propiedad. Por ello la libertad política en el capitalismo tardío, en el que la clase obrera no tiene propiedad de los medios de producción más allá de su propia fuerza de trabajo, amenaza potencialmente al propio capitalismo.

La cuestión que surge es la de cómo puede la clase capitalista dirigir políticamente o influir el sistema político de forma decisiva. Una respuesta está en las presiones estructurales e instrumentales contrarias al desarrollo de una política estatal que favorezca a la clase trabajadora en contra del capital. Otra respuesta la constituye el militarismo, especialmente frecuente en los países capitalistas del Tercer Mundo, subdesarrollados y dependientes. El fascismo puede aparecer superficialmente como una respuesta importante en los países desarrollados. Pero el fascismo fue históricamente específico de las potencias industriales desposeídas, sin colonias ni amplios territorios, en los años veinte y treinta, y en cualquier caso fue derrotado y reemplazado por democracias burguesas más o menos estables. En términos teóricos, el recurso al fascismo como solución a la contradicción entre capital y trabajo, o economía y poder potencial político, constituye un abandono de los principios.

En los países desarrollados hay en principio dos posibles soluciones a la contradicción. Una es el uso del poder político por la clase trabajadora para establecer un poder económico proletario, por ejemplo creando o elaborando el Estado del bienestar o socializando las industrias nacionalizadas. Esto no quiere decir que se haya producido siempre una conexión directa entre la política del partido de la clase trabajadora y la expansión del Estado del bienestar. Estudios empíricos han demostrado que los programas de los partidos y los resultados electorales han tenido escasa influencia en el porcentaje del presupuesto del Estado dedicado al bienestar, lo que indica que el partido mayoritario de la clase obrera ha sido sólo un camino hacia el Estado del bienestar. La agitación directa mediante los movimientos de masas y los sindicatos ha sido, sin duda, más importante que la actividad del partido entendida convencionalmente. Si se analiza el problema en el contexto más amplio del sistema burgués de partidos como tal, y no sólo desde el punto de vista del desarrollo del partido obrero, se observa una conexión entre el desarrollo de la clase obrera mayo-

ritaria, la agitación de la clase obrera en todas sus formas, y la creación y crecimiento del Estado del bienestar definido en términos amplios. El Estado del bienestar se constituye por diferentes caminos, incluyendo fórmulas como las reformas corporativas liberales *tories* o rooseveltianas. Pero en el fondo de estas reformas está el poder y el comportamiento amenazante de las clases trabajadoras. Es preciso poner de relieve que las relaciones entre la clase productora y el Estado cambian profundamente cuando el proletariado se convierte en la clase mayoritaria. Los viejos partidos demócrata y socialista, constituidos por trabajadores por cuenta propia y artesanos, eran instrumentos de estas clases contrarios a las tendencias centralizadoras del Estado burgués que históricamente realizaban una política tendente a reforzar el capital en contra de la lucha de los pequeños productores y artesanos que querían mantener las viejas formas de vida frente a los ataques violentos del capital (incluyendo las tendencias capitalistas originadas en el seno de los pequeños productores). Las manifestaciones extremas de estas luchas iban desde el socialismo utópico al anarquismo. Pero las luchas de la nueva clase trabajadora asalariada, especialmente las de los trabajadores en masa, revolucionó los términos de la relación entre proletariado y Estado. La nueva clase trabajadora intentó usar el Estado para conseguir sus propios fines. Entre tanto, con el avance de las fuerzas sociales productivas, la clase capitalista intentó usar el Estado también para sus propios objetivos. Por ello el intervencionismo tiene un significado doble y contradictorio y el Estado se convierte en el principal campo de batalla entre el capital y el trabajo. El *laissez-faire*, que en un tiempo significó políticamente «dejad a nuestro poder político solo», se hace imposible al orientarse la constelación de clases en un sentido favorable a la clase trabajadora. Es ya muy avanzado el proceso de acumulación cuando aparece un Estado verdaderamente capitalista. Irónicamente, se trata de un Estado en el que la mayoría de sus miembros o ciudadanos tienen plenos derechos políticos burgueses pero no la propiedad de los medios de producción más allá de su propia fuerza de trabajo: un Estado en el que los trabajadores sin propiedad viven con los derechos políticos de los que tienen propiedad.

Más específicamente, la temprana concepción del Estado, que consideraba la fuerza de trabajo como una mercancía vendida por trabajadores individuales en condiciones de competencia, es reemplazada por una nueva consideración del trabajo como atributo de los ciudadanos individuales que debe ser reproducido con independencia de que sea o no objeto de explotación como capital. La lucha de la clase trabajadora para eliminar la competencia entre trabajadores individuales en el mercado de trabajo requirió que se produjeran, al nivel más o menos convencional, tanto la fuerza de trabajo de los desempleados y subempleados como la de los trabajadores con empleo. La clase trabajadora pidió que el Estado protegiera y asegurara al excedente de población, que es inherente al proceso de acumulación, para evitar que funcionara efectivamente como un ejército de reserva de desempleados, es decir, bajando los salarios y endureciendo la disciplina en la producción.

Cuando el viejo concepto de fuerza de trabajo como mercancía es reemplazado o complementado con el nuevo concepto de fuerza de trabajo como atributo individual, la vieja idea del partido obrero como partido revolucionario es reemplazada por la nueva idea de partido obrero como partido de reforma. El apoyo y la garantía estatales a la reproducción de la fuerza de trabajo o la nacionalización de la reproducción de actividades inhibe los movimientos revolucionarios y el desarrollo de los partidos insurreccionales. El Estado del bienestar y sus políticas redistribuidoras de las fuerzas productivas (por ejemplo, el salario social) y nacionalizadoras de las actividades reproductivas se convierten en importantes estabilizadores del sistema en su conjunto. Por el contrario, en la Rusia zarista y otros países en los que el Estado absolutista no fue desmantelado, el Estado no permitió que la clase obrera estable-

ciera derechos políticos (aunque la clase capitalista apoyó tímidos avances hacia la democracia política) y la clase capitalista no permitió que la clase obrera avanzara económicamente (aunque el Estado no dejaba de apoyar a veces las demandas económicas de los trabajadores). En Rusia, el capital y el Estado absolutista fueron incapaces de ponerse de acuerdo en un programa de reforma y de aquí que en 1917, cuando las condiciones coyunturales estaban muy maduras, un sistema en el que la reforma aceptable estaba bloqueada estalló en una revolución.

4. La segunda resolución de la contradicción entre la economía y el poder del capital y la fuerza política de masas de la clase trabajadora la constituye el uso que los capitalistas hacen de su poder económico para eliminar o reducir sin estridencias el poder político real o potencial de la clase trabajadora. A la vez que la lucha de la clase trabajadora para usar su fuerza política para establecer el Estado del bienestar en sentido amplio, se desarrolla una lucha capitalista para vaciar el Estado capitalista de todo contenido político real o potencial y castrar así la mayoría de la clase trabajadora. Ambas luchas caracterizan a las democracias burguesas avanzadas y tal vez merecen ser descritas como la forma más relevante de manifestarse la lucha de clases en la arena política. Baste mencionar que la lucha capitalista ha sido bien documentada en estudios sobre la burocratización de la vida pública, la despolitización de la toma de decisiones públicas, el crecimiento de autoridades especiales y del poder ejecutivo centralizado y otros.

El resultado de estas luchas simultáneas —la primera con el objetivo de incrementar el nivel de vida de las masas trabajadoras en su conjunto o en parte, independientemente de su papel en el proceso productivo y dando lugar a una u otra variedad de reforma económica y social; la segunda con el objetivo de dividir y fragmentar a la clase trabajadora para evitar que use su poder político potencial para terminar con el propio capitalismo— es transformar la naturaleza del partido político de la clase trabajadora. Los obreros dejan de lado la revolución para conseguir reformas mientras que los capitalistas se adaptan a las reformas para escapar a la revolución. El partido de la clase trabajadora se convierte finalmente en el partido gobernante o nacional, o al menos en el partido clave en los gobiernos de coalición nacional. Tal es el caso de los partidos laboristas y socialdemócratas de Europa, y, sin duda, sería también el caso de los partidos comunistas europeos en Italia y Francia (que, en cualquier caso, presionan activamente para participar en gobiernos de coalición), en el supuesto de que no tuvieran que vivir con el condicionamiento de la revolución bolchevique y del actual Estado soviético.

Desde el punto de vista del capital, la tregua temporal y no siempre fácil entre las dos clases en forma de gobiernos y políticas reformistas entraña generalmente un peligro. Mientras el Estado del bienestar constituye un freno para la insurrección y la revolución en el sentido leninista, socava el capitalismo disminuyendo o eliminando el clásico papel del ejército de reserva de desempleados en el proceso de acumulación. El Estado del bienestar subvierte también los principios capitalistas al sustituir el uso estatal de la producción de bienes por el intercambio privado de ésta y al generar nuevas contradicciones en los procesos de circulación (por ejemplo, crisis fiscal, inflación permanente, etc.). Este reformismo también interfiere en el mecanismo de acumulación en el sentido de que la clase trabajadora establece una política abstracta y generalizada de peticiones y derechos que, en último término, no concuerdan con la esclavitud del salario.

Por estas razones la supervivencia del capitalismo y la continuación de la acumulación de capital requiere de los partidos gobernantes la aceptación de la responsa-

bilidad del orden social en su conjunto y el que el partido de la clase obrera en particular se adapte al papel de sentido de gobierno o de partido de coalición en el gobierno nacional. Esta solución universal al problema de la dirección política capitalista ha sido aceptable por la clase trabajadora hasta el presente porque ha significado el triunfo del economicismo: alta tasa de empleo, salarios crecientes, seguridad creciente y salario social en expansión. Ha sido aceptable para la clase capitalista porque ha conformado a la clase trabajadora en su propia imagen de economicismo y mentalidad productivista (e individualista y privatista), lo que no sólo es un seguro contra la revolución sino que también tiene la positiva ventaja de acrecentar y asegurar el mercado de masas y, en general, la forma de vida consumista. Los partidos de la clase obrera que gobiernan en las democracias capitalistas continúan por ello representando y actuando de instrumentos de la clase trabajadora, como propietarios y vendedores de la fuerza de trabajo y, al mismo tiempo, ignoran o descuidan los intereses de los trabajadores en tanto que productores sin propiedad en las fábricas y empresas capitalistas.

5. Las diferencias entre los partidos de la clase capitalista y de la trabajadora definidos en sentido amplio (Tories y Laboristas, Demócratas y Socialdemócratas, Demócratas y Comunistas, Republicanos y Demócratas, etc.) gira normalmente en torno al problema de las políticas «correctas» de acumulación. El partido capitalista favorece de ordinario la vieja política de recesión para solucionar la indisciplina de la clase obrera, los altos salarios y la inflación, etc., junto con políticas de impuestos y gastos y una legislación generalmente favorecedora de las inversiones y de los beneficios. El partido de la clase obrera tiene una importante opción política en la promoción del pleno empleo y en la legislación de impuestos y gastos orientados a expandir el consumo. Sea el partido capitalista o el obrero el gobernante (sólo o en coalición), los gobiernos capitalistas se ven obligados a promover la acumulación de capital aunque la naturaleza exacta de las políticas de acumulación pueda resultar problemática. El partido no gobernante puede permitirse ignorar las necesidades de acumulación (aunque sean entendidas y sea cual sea la relación entre las intenciones y los resultados finales de la política) y en este sentido ha habido poco cambio en los Estados capitalistas en el siglo pasado. La política de la clase capitalista se limita a los problemas de acumulación y a problemas relativos a la ley y al orden o al control social, y desde el punto de vista del capital el Estado legítimo es el Estado que desempeña con éxito la función de acumulación. Sin embargo, en la mayoría electoral de la clase trabajadora y la dirección nacional por parte de su partido son factores nuevos en la historia. Cualquier gobierno formado por cualesquiera partidos tiene que enmascarar o mistificar las funciones de acumulación que están a cargo del Estado si no quiere perder su legitimidad entre las masas. Además, el partido o partidos gobernantes tiene también que aspirar a encontrar o desempeñar realmente no sólo las tareas de acumulación sistemática sino también las de carácter proletario o humano que existen independientemente de las necesidades de acumulación y que están a menudo en contradicción con ellas.

Los partidos políticos son así agencias que deben bregar con la insalvable contradicción entre las funciones de acumulación y las de legitimación del Estado. La dirección nacional por un partido obrero o capitalista, solo o en coalición, no puede eliminar por sí misma las contradicciones estructurales básicas del capitalismo. Por el contrario, los modernos partidos políticos en las democracias burguesas reproducen las contradicciones entre el trabajo y el capital en sus estructuras y políticas. Ambos partidos necesitan tanto dinero como votos para ganar las elecciones y el poder nacional. El partido capitalista tiene asegurado el dinero y el de los trabajadores los votos, y lo corriente es que ambos partidos compitan entre sí por votos y dinero, res-

pectivamente, y también por la cuestión de cuál de los partidos resulta más representativo. Los partidos triunfantes de la «derecha», el «centro» o la «izquierda» tienen que poseer una conformación y un arraigo multclasistas. En este proceso de competencia entre partidos y de desarrollo de una retórica política desprovista de análisis y proyectos de clase, la clase trabajadora queda excluida de la política por medio de la imposición de un modo específico de participación política que predetermina el contenido de la vida política. Los tradicionales derechos democráticos burgueses son entonces vaciados de todo contenido de clase o, al menos, neutralizados.

La necesidad que tienen los partidos gobernantes de enfrentarse a la contradicción entre acumulación y legitimación (y su propia contradicción entre dinero y votos), y el intento de suavizar o encubrir las diferencias entre capital y trabajo significan que los partidos ya no pueden ser instrumentos efectivos de clases particulares (en efecto, cada partido representa a todos los propietarios de bienes, incluidos los propietarios de su fuerza de trabajo, es decir, representan a todo el mundo). Esta necesidad significa también que los partidos son incapaces de hacer frente a las necesidades de acumulación sistemática o a las necesidades humanas proletarias de forma efectiva. Por el contrario, los gobiernos nacionales formados por los principales partidos en solitario o en coalición incrementan normalmente las contradicciones materiales de la sociedad capitalista, por ejemplo mediante políticas fiscales que constituyen compromisos inefectivos entre las necesidades de acumulación sistemática y las necesidades proletarias, y políticas de gastos que ni disciplinan efectivamente a las masas trabajadoras ni satisfacen las necesidades materiales básicas de ésta (más allá de la simple reproducción de la fuerza de trabajo a un nivel más o menos convencional).

Por otra parte, el moderno sistema de partidos políticos realiza una función ideológica esencial en las sociedades capitalistas desarrolladas. Los partidos políticos se han transformado en organizaciones de políticos profesionales especializados en intentar equilibrar capital y trabajo y en este sentido son especies de asociaciones profesionales. La dimensión profesional del político-profesional garantiza que los políticos que alcanzan la cumbre de la dirección del país son dignos de confianza desde el punto de vista del capital (es decir que profesional significa corruptible o sobornable). La dimensión política del político-profesional asegura que el liderazgo político conlleva algún tipo de circunscripción electoral necesaria para el cumplimiento de su función legitimatoria. Los políticos profesionales y los partidos organizados por esos políticos no pueden ser instrumentos de ninguna clase particular precisamente porque tienen que ser oportunistas. Deben combinar victoriosamente dinero y votos sin preocuparse —o sin tener la capacidad política de permitirse esa preocupación— de quién son el dinero y los votos que usan para alcanzar el poder. Sus propios intereses materiales y de carrera se basan en las victorias electorales para sí mismos y sus partidos. De aquí que los políticos concedan gran significación pública a las campañas electorales y a sus resultados (incluso cuando no tienen mayor significación para nadie más). Exceptuando las diferencias de retórica y las diferencias marginales en la forma en que las opciones son formuladas y discutidas (o sea, en generalizaciones vagas y generalmente vacías), la principal idea que los políticos transmiten durante las campañas electorales es la de que existen importantes diferencias de hecho entre ellos y sus rivales y que el hecho de quién gane o pierda tendrá consecuencias materiales significativas para la sociedad en su conjunto. En efecto, todos los políticos insisten en lo mismo, a saber, que los cambios en la dirección pública darán lugar a importantes cambios en la sociedad o preservarán valores esenciales. «Los políticos rigen nuestras vidas», dijo un importante senador en una reunión del Partido Demócrata este año, cuando la verdad es más bien lo contrario.

La interminable competición por el dinero y los votos (y por la buena cobertura de los servicios de información, la visibilidad pública, etc.) hace que los políticos se echen unos a otros la responsabilidad sobre lo que en el fondo son contradicciones y fracasos estructurales sociales y económicos del propio capitalismo (incluyendo las irracionalidades en los programas y políticas estatales del capitalismo). Estos problemas estructurales de desempleo, inflación, pobreza, escasez de bienes, crisis fiscal, malestar social, etc., así como las contradicciones originadas o intensificadas por la competencia entre partidos, se transforman por medio de la retórica de la política burguesa en fallos de dirección y en limitaciones personales o profesionales de los políticos en el gobierno (del mismo modo que las contradicciones estructurales ocultas en la producción capitalista son consideradas como disfunciones de los procesos de circulación o del mercado donde esas contradicciones se manifiestan). Las contradicciones de sistema y las tendencias de crisis son personalizadas e individualizadas y, en consecuencia, se disimulan y trivializan.

El cambio de partidos y políticos en el poder se convierte así en la forma institucionalizada en que la tiranía del capital y la burocracia del Estado permanecen intactas. El suave funcionamiento del sistema de partidos políticos legitima directamente al Estado e indirectamente al capital creando la ilusión de una libertad política a través de la competencia por los votos y el dinero y contribuye a asegurar la continuidad del sistema capitalista en su conjunto. A pesar de que no existe garantía de que el sistema de partidos vaya a continuar funcionando así indefinidamente (y cuando los partidos se convierten o vuelven a ser armas organizativas para la lucha de clases dejan de constituir fuentes efectivas de este tipo de legitimación), el éxito del sistema de partidos estadounidense en convertir las contradicciones estructurales en fallos de los políticos y de los partidos se evidencia por la amplia literatura analítica sobre las elecciones que muestra que los votantes responden más fuertemente a las personalidades y a los símbolos políticos.

La personalización de la política electoral burguesa cotidiana (y consecuentemente la trivialización de la política) que es la norma electoral básica en las democracias burguesas constituye la manifestación empírica del papel ideológico de los políticos y de los partidos: ser el pararrayos de las tendencias críticas estructurales. Las campañas y elecciones políticas normales y el gobierno de partidos aseguran que el sistema capitalista no es cuestionado ni desafiado, mientras que los políticos y partidos individuales se echan crecientemente la culpa de las disfunciones de la sociedad. No se trata sólo de que los políticos profesionales esquiven los problemas reales por motivos electorales (y al hacerlo así se definen implícitamente a sí mismos como hombres sin política), sino de que el sistema político como tal elude necesariamente los verdaderos problemas. Y cuanto más se basa la política en la personalidad y en el símbolo, en términos empíricos, menos claramente consideradas aparecen las opciones en la superficie y más soterradas se encuentran las opciones de la vida política burguesa.

El carácter pluri-electoral y consensuado del moderno sistema de partidos políticos que realiza la esencial función ideológica antes señalada tiene su base material en la organización social de grupos de interés. Cada uno de los grandes partidos es el portavoz de muchos grupos de interés que se basan normalmente en actividades particulares o en intereses regionales o sectoriales. Para los políticos el camino más fácil al poder es representar un interés de grupo y moverse para conseguir el apoyo del Estado, una reglamentación favorable, etc., que redunde en beneficios para el dueño, empleos para los trabajadores, pedidos a los proveedores, actividad para los comerciantes locales, etc. La realización con éxito de una política de grupos de interés acomoda al capital y al trabajo y garantiza al mismo tiempo que el sistema de partidos con

grupos de interés como base material continuará funcionando como parachoques mistificador para la burocracia estatal y el capitalismo en general. En vez de un liderazgo de clase abierto y público tenemos un liderazgo de grupos de interés oculto y privado. En lugar de la guerra entre capital y trabajo en la que el poder político proletario de fin a la dominación capitalista de la vida económica, tenemos la competencia económica y política en el interior de los partidos y entre ellos, y a las empresas particulares y a las regiones organizadas como grupos de interés que sólo pueden, en último término, ser racionalizados y asumidos en un Estado corporativo, definido de forma más o menos formal.

6. El moderno sistema de partidos contiene una contradicción potencialmente explosiva que se origina en el funcionamiento ideológico del propio sistema. El éxito en la actividad del sistema de partidos hace que el irracional y explotador sistema capitalista y estatal aparezca como racional y equitativo. Pero el coste de la legitimación del sistema capitalista como tal es la definitiva pérdida de legitimidad de los políticos profesionales y de sus partidos y, sin duda, del propio sistema de partidos. Mientras mayor es la competencia entre políticos y partidos y mientras más se echan mutuamente en cara la presión social, los apuros económicos y los problemas, más sólidos y racionales parecen ser el capital y el Estado. La contradicción es que mientras más sólido parece el sistema del capital y el Estado, más débil e irracional resulta la política del sistema de partidos. El capital tiene que intervenir cada vez más en diversos procesos económicos y sociales y de aquí que exista una responsabilidad creciente en el sistema de partidos como salvavidas institucionalizado. Los políticos individuales y sus organizaciones se convierten de forma creciente en cabezas de turco del mal funcionamiento interno del capitalismo. Por otro lado, estos mismos políticos y partidos intentan adquirir una significación precisamente porque critican a los otros por las contradicciones estructurales. Este es el potencial de un enorme déficit de legitimación. ¿Cómo puede la ciudadanía creer que los partidos tienen realmente un contenido y creer, al mismo tiempo, que son cada vez menos significativos?

La frustración y confusión estructural generada por el sistema de partidos se resuelve finalmente en una sacudida o colapso de la fe en los políticos profesionales y en los partidos. Esta parece ser una tendencia universal en la moderna sociedad capitalista. En los Estados Unidos la crítica establecida al pluralismo, al concepto de «Estado del bienestar», etc., se concentra en el Partido Demócrata y, generalmente, en los políticos profesionales, no solamente en políticos individuales. Aunque permanezcan elementos del viejo sistema (por ejemplo, Ford como el republicano tradicional), el sistema crea finalmente la necesidad de políticos no-políticos, o de políticos técnicos. Especialmente la clase capitalista se hace cada vez más hostil y recelosa con respecto a los poderes elegidos porque le es imposible controlarlos y porque se supone que el típico político elegido en un ámbito representativo es completamente irresponsable desde el punto de vista de las políticas y exigencias de acumulación. Un estudio reciente sobre las opiniones de los principales directivos de las corporaciones muestra que incluso la acción de votar es considerada como inherentemente irresponsable porque no se asocia con ninguna consecuencia económica ni con costos inmediatos. En contraste con el «consumidor», el trabajador y el hombre de negocios, el votante es considerado como alguien que no tiene incentivos para ejercer una restricción económica. Según estos dirigentes de negocios, existe una ausencia de responsabilidad económica inherente a los procesos democráticos burgueses.

Como los políticos y los partidos pierden el respeto popular y la legitimidad porque están atrapados entre las políticas de legitimación y de acumulación, entre la necesidad del dinero procedente de los negocios y la de los votos de la clase trabajadora, y,

en definitiva, entre el capital y el trabajo, los propios directivos sociales a sueldo de la clase capitalista y de la burocracia estatal también llegan a despreciar a los políticos. Este nuevo sector que aspira a conciliar las contradicciones entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas —y especialmente los economistas, que son, de los expertos sociales, los más arrogantes—, aspiran a liberarse ellos mismos y a liberar a sus jefes de las presiones contradictorias de la democracia burguesa. Esta evidencia se extiende desde la reciente denuncia por parte del Banco de Inglaterra de la política económica del gobierno laborista (un histórico punto de arranque) hasta el desprecio absoluto de los altos funcionarios civiles franceses hacia los procedimientos y su renuncia a consultar con el Parlamento en la planificación económica, pasando por las maniobras ocultas de grupos como el *Ash Council* en Estados Unidos y el gobierno secreto de Richard Nixon. Los puntos de vista de los técnicos sociales son recapitulados sucintamente por el alto planificador económico Helbert Stein que afirmó en relación con el actual debate sobre las dimensiones de los déficits del presupuesto federal que ahora los políticos tienen nuevos pretextos para sus elucubraciones¹. Como los capitalistas y el Estado burocrático que les paga, los técnicos sociales aparecen como defensores de la sustitución de la tradicional democracia burguesa por una u otra variedad de corporativismo. La vieja reforma *tory* ya no es solución de recibo: el capital no tiene motivos para ceder la mayor parte de su poder ampliando el derecho de voto, tanto más cuanto que es cierto que la ampliación del sufragio a la mayoría de la clase obrera fue un factor determinante en la crisis actual. Por otra parte, existe por parte del capital escaso interés y atractivo en desmantelar el Estado del bienestar y poner fin a la libre negociación colectiva. Dos escritores británicos llegan a decir que la consecuente orientación al corporativismo es inevitable en Gran Bretaña y en el mundo desarrollado, y que «...a medio plazo, sea cual sea el partido que esté en el poder, el resultado será el mismo»².

Dado que los políticos y los partidos se echan la culpa unos a otros de los problemas básicamente estructurales sin ser capaces de mejorar o resolver esos problemas, pierden su credibilidad no sólo con respecto al capital y a los técnicos sociales sino también con respecto a los sindicatos y al conjunto de la clase trabajadora. En todo el mundo capitalista avanzado, las grandes uniones y federaciones sindicales están replanteándose sus relaciones históricas con los partidos políticos y empezando a formar nuevas alianzas entre sí, a menudo a pesar de importantes diferencias ideológicas. Estas acciones han tendido a solidificar los sindicatos y al mismo tiempo han alterado las bases políticas de los principales partidos de Europa, especialmente de los socialdemócratas. En Estados Unidos puede observarse un proceso parecido de reconstrucción de las lealtades políticas.

En resumen, parece que asistimos al declive de los partidos como organizaciones políticas en el sentido tradicional y al ascenso de nuevos tipos de organización y actividad política. Las organizaciones laborales van poniendo menos énfasis en ganar las elecciones para los «amigos de los trabajadores» (especialmente los políticos del partido demócrata) y más énfasis en presionar y en ejercer intervenciones directas en aparatos del Estado que tengan que ver con materias que conciernen a los sindicatos. Para el movimiento feminista, los grupos de defensa del consumidor y del medio ambiente y los movimientos de las minorías oprimidas, las presiones directas e indirectas parecen ser más importantes que las propias campañas electorales. Y para la izquierda, las tendencias autodestructivas que parecen ser inherentes al sistema político burgués de partidos ofrecen promesas significativas de futuro. Por una parte, la clase capitalista y sus directivos y técnicos sociales no tienen interés en relegitimar a los políticos profesionales y a los procesos electorales. Por otra parte, los distinguidos políticos profesionales a escala nacional intentan dar la imagen de planifi-

cadores sociales y económicos imparciales (sin duda para salvar su propia piel). ¿Hay alguna posibilidad para la izquierda de desarrollar una política de masas que sea vista como legítima? Si así es, ¿puede ésta organizarse en torno a actividades electorales sin sufrir el mismo destino que los políticos al uso y sus partidos? ¿O puede concentrar sus energías en intervenciones directas en la sociedad civil, especialmente en la burocracia estatal donde la actividad directa del Estado se ejerce? Cada vez es más evidente que ésta es exactamente la actividad presente de los reformistas o izquierdistas más plausibles. Son ejemplos de ello actividades como el *lobby* del pueblo, la crítica cotidiana de la sanidad, de la planificación urbana y otras esferas, de los sistemas de educación y seguridad social, etc., llevadas a cabo por trabajadores estatales, asociaciones de vecinos que pretenden descentralizar el poder político en las ciudades, las organizaciones que luchan por ampliar los viejos derechos establecidos en el interior del Estado y establecer nuevos derechos y posibilidades de intervención en los presupuestos del Estado y en los procesos presupuestarios; organizaciones que se mueven en contra de los programas y procesos de renovación urbana, agencias controladoras y otras actividades estatales dentro y fuera de la competencia del capital privado y de sus aliados; la actividad que desarrolla la izquierda con respecto al sistema judicial, especialmente los procesos, la reforma penitenciaria y la asistencia legal popular.

¿Constituyen estas prácticas el anuncio de una nueva política popular y obrera dirigida al corazón mismo de la sociedad civil? ¿Constituyen sus éxitos el camino que amenaza realmente la política burguesa del Estado? El hecho mismo de plantearse estas preguntas es quizá ya una respuesta.

Traducción: Teresa González y Feliciano Páez-Camino

¹ «Looking Beyond the Budget Deficit». *Wall Street Journal*. July 28. 1975.

² R. E. Pahl and J. T. Winkler: «The Coming Corporatism». *Challenge*. 3/4. 1975. 35.

